

Contestación a la demanda y al llamamiento en garantía por SBS Seguros Colombia S.A. | Amalia Rojas Franco vs. Acuavalle S.A. E.S.P. | Rad. 2022-385

Cristian David Pérez Quilindo <cdperez@hgdsas.com>

Mié 28/08/2024 13:53

Para: Juzgado 05 Administrativo Oral - Valle del Cauca - Cartago <j05admcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: olsuafra28@hotmail.com <olsuafra28@hotmail.com>; olgasuarezfranco1964@gmail.com <olgasuarezfranco1964@gmail.com>;
notificacionjudicial <notificacionjudicial@roldanillo-valle.gov.co>; notificacionjudicial@acuavalle.gov.co <notificacionjudicial@acuavalle.gov.co>;
acuavalle@acuavalle.gov.co <acuavalle@acuavalle.gov.co>; acuavalledefensa@gmail.com <acuavalledefensa@gmail.com>;
atencionalcliente@serviciospublicosroldanillo.com <atencionalcliente@serviciospublicosroldanillo.com>; julianhernandezaguirre@gmail.com
<julianhernandezaguirre@gmail.com>; notificacionesjudiciales@celsia.com <notificacionesjudiciales@celsia.com>;
notificacionesjudiciales@axacolpatria <notificacionesjudiciales@axacolpatria>; Notificaciones SBS Seguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>;
notificacionesjudiciales@hdi.com.co <notificacionesjudiciales@hdi.com.co>; santiago castaño ramirez <notificacionesjudiciales@sura.com.co>;
nestoralejandrogarciafranco <nestoralejandrogarciafranco@gmail.com>; Notificaciones Judiciales Celsia Colombia
<notjudicialcelsiaco@celsia.com>; fjhurtado <fjhurtado@hurtadogandini.com>; Orlando Arango Lagos <oarango@hgdsas.com>; Juan Diego Robles
Ruiz <jdrobles@hgdsas.com>; Valentina Pineda <vpineda@hgdsas.com>

📎 5 archivos adjuntos (2 MB)

2024-08-28 - Contestación demanda y llamamiento en G. - SBS Seguros-DESKTOP-VF1A3RI.pdf; Póliza No. 8001083928.pdf; Poder, otorgamiento y CERL SBS.pdf; CERL HGD.pdf; Póliza No. 1000168 SBS.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de cdperez@hgdsas.com. [Por qué esto es importante](#)

Doctor

Víctor Hugo Aguirre Ceballos

Juzgado Quinto Administrativo de Cartago

Vía e-mail

Referencia: Medio de control de reparación directa promovido por Amalia Rojas Franco y otros vs. Acuavalle S.A. E.S.P. y otros.

Radicado: 2022-385

Asunto: Contestación a la demanda y al llamamiento en garantía - SBS

Por instrucciones del doctor Francisco J. Hurtado Langer, quien obra en calidad de representante legal y profesional adscrito a la sociedad de servicios jurídicos Hurtado Gandini Davalos Abogados S.A.S., apoderada especial de SBS Seguros Colombia S.A., me permito presentar contestación a la demanda del proceso de la referencia, e, igualmente, al llamamiento en garantía presentado por Acuavalle S.A. E.S.P. frente a SBS Seguros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 201A de la Ley 1437 de 2011, se copia el presente correo a los sujetos procesales respecto de los cuales se cuenta con dirección electrónica.

Cordialmente,

□



Cristian David Perez Q. | Abogado Junior

Litigio, Seguros y Responsabilidad Civil

Calle 22 Norte No. 6 AN - 24, Oficinas 901 Edificio Santa Mónica Central

PBX [+57 \(602\) 6410900](tel:+576026410900) | Cali - Colombia

www.hgdsas.com

[Linkedin](#)



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos.

Doctor
VÍCTOR HUGO AGUIRRE CEBALLOS
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE CARTAGO
Vía e-mail

Referencia: Medio de control de reparación directa promovido por
AMALIA ROJAS FRANCO y otros vs. ACUAVALLE S.A. E.S.P.
y otros.

Radicado: 2022-385

Asunto: Contestación a la demanda y al llamamiento en garantía

FRANCISCO J. HURTADO LANGER, abogado identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal y profesional adscrito a la sociedad de servicios jurídicos HURTADO GANDINI DAVALOS ABOGADOS S.A.S., apoderada especial de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad legalmente constituida, con NIT 860.037.707-9, con domicilio principal en Bogotá D.C., representada legalmente por RICARDO SARMIENTO PIÑEROS, según el poder especial conferido y que fue remitido por la compañía a través de su correo designado para notificaciones judiciales, me permito contestar la demanda del proceso de la referencia, e, igualmente, contestar el llamamiento en garantía presentado por . ACUAVALLE S.A. E.S.P. frente a mi representada, según se indica a continuación.

I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ESTE ESCRITO

El 22 de agosto de 2024 el Despacho remitió a mi mandante correo electrónico de notificación personal del Auto No. 790 de 02 de agosto de 2024, dictado dentro del proceso en referencia, por medio del cual se admitió. De conformidad con el inciso 4 del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, esta notificación se entendió surtida una vez transcurridos dos (2) días hábiles desde el envío del mensaje de datos, es decir, el día 26 de agosto de 2024.¹

¹ Los días 24 y 25 de agosto de 2024 no corrieron términos por ser días inhábiles.

En ese orden de ideas, el término de quince días para contestar la demanda debía transcurrir de la siguiente manera:

27, 28, 29, 30 de agosto, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 y 16 de septiembre de 2024, inclusive.²

En consecuencia, este escrito es presentado en forma oportuna.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO.- No me consta lo consignando en este numeral, habida cuenta de que se trata de circunstancias personales de la demandante, sobre las cuales no podría tener conocimiento mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Así pues, me atengo a lo que se acredite en las siguientes etapas procesales.

AL HECHO SEGUNDO.- No me consta lo consignando en este numeral, habida cuenta de que se trata de circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el supuesto accidente, sobre las cuales no podría tener conocimiento mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Así pues, me atengo a lo que se acredite en las siguientes etapas procesales.

Sin embargo, debe resaltarse en esta oportunidad que se constituye en una falta de prudencia de la demandante y sus familiares el permitir que una persona de 70 años transitara sin acompañante, conforme al artículo 59 de la Ley 769 de 2002.

Por otra parte, con este hecho se confiesa que el daño se produjo por una rampa construida sobre el andén de la “*casa identificada con la nomenclatura 9-75*”, de modo que el verdadero legitimado para responder por los perjuicios sería el dueño de dicho inmueble al construir la rampa.

Finalmente, no puede perderse de vista que en todo el escrito de demanda no se explica la incidencia causal del servicio prestado por Acuavalle, por lo cual se presenta una manifiesta falta de legitimación material en la causa por pasiva.

² Los días 30, 31 de agosto, 01, 07, 08, 14 y 15 de septiembre de 2024 no corrieron términos por ser días inhábiles.

DEL HECHO TERCERO AL DÉCIMO PRIMERO.- No me consta lo consignando en estos numerales, habida cuenta de que se trata de circunstancias médicas de la demandante, sobre las cuales no podría tener conocimiento mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Así pues, me atengo a lo que se acredite en las siguientes etapas procesales, especialmente en la historia clínica.

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO.- No me consta lo consignando en este numeral, habida cuenta de que se trata de supuestos gastos de transporte sobre los cuales no existe ninguna prueba hasta el momento, sobre las cuales no podría tener conocimiento mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Así pues, me atengo a lo que se acredite en las siguientes etapas procesales.

AL HECHO DÉCIMO TERCERO.- No me consta lo consignando en estos numerales, habida cuenta de que se trata de circunstancias médicas y que rodean la vida personal de la demandante, sobre las cuales no podría tener conocimiento mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Así pues, me atengo a lo que se acredite en las siguientes etapas procesales, especialmente en la historia clínica.

2. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a cada una de las declaraciones y pretensiones de la demanda, pues carecen de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad.

Lo anterior, debido a que la parte demandante no logra, siquiera de forma sumaria, demostrar los elementos que configurarían la eventual responsabilidad en cabeza de la parte demandada, ni da razón que justifique la desproporción de sus pretensiones. Evidenciando que no se constituyen las premisas fácticas y jurídicas que configuran los elementos de la responsabilidad que se pretende, y en lo que a ella respecta no hay prueba alguna que pueda soportar las pretensiones de la demanda, me opongo a todas ellas por considerarlas improcedentes. En ese orden de ideas, se formulan las siguientes:

3. EXCEPCIONES DE MÉRITO

3.1. Incertidumbre de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que impiden la imputación fáctica – Ausencia de nexo de causalidad

En el presente caso no existe relación de causalidad entre la conducta de Acuavalle y el perjuicio alegado por la parte actora. Dentro de los requisitos que de tiempo atrás la ley, la doctrina y la jurisprudencia han determinado para que surja la responsabilidad administrativa, está el denominado nexo causal.

Esto no es otra cosa que la relación o vínculo que debe existir entre el hecho que se reputa dañino y el daño. En este orden de ideas, si no hay nexo causal, no surge responsabilidad alguna y, por ello, en el caso que nos ocupa no puede condenarse a Acuavalle, cuando su conducta nada tuvo que ver con el resultado dañoso o, al menos, no hay prueba de ello.

Para probar la existencia del nexo causal es necesario que la causa real, fáctica, sea aquella determinante en el acaecimiento del hecho, lo cual no se refleja en el caso *sub judice*. La jurisprudencia nacional ha avalado esta posición dentro de sus pronunciamientos:

(...) la jurisprudencia nacional ha utilizado como método para identificar la ‘causa’ del daño, la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, sólo es causa del resultado, aquella que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo (...). Así lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de 22 de junio de 2001, con ponencia del Consejero Doctor, Ricardo Hoyos Duque: ‘(...) es claro que sólo alguna o algunas de las causas que intervienen en la realización del daño son jurídicamente relevantes. Para establecer cuál es la determinante en la producción del daño se han ideado varias teorías y aunque su validez no es absoluta pues con ninguna de éstas puede obtenerse la solución de todos los casos concretos, sí constituyen ayudas metodológicas importantes. La teoría de la causalidad adecuada es la de mayor acogida en la jurisprudencia, (...). Según esta teoría, sólo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo. Por lo tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante (...).’³ (Destacado fuera del texto original).

En esta misma línea, el Consejo de Estado se ha pronunciado así:

La equivalencia de condiciones fue sustituida –en la jurisprudencia de esta Corporación– por la teoría de la causa adecuada, de acuerdo con la cual “*de todos los hechos que anteceden*

³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado ponente: Ariel Salazar Ramírez. SC13925-2016. Radicación 05001-31-03-003-2005-00174-01. Bogotá D.C., treinta de septiembre de dos mil dieciséis.

la producción de un daño solo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata". Esta teoría fue acuñada e implementada, por el rechazo a la equivalencia de condiciones, "[...] *pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito*". Así pues, en aras de una racionalización, el juicio de responsabilidad se enfocó en lo que cabría esperar normalmente, bajo la premisa de que un sujeto sólo está obligado a resarcir un perjuicio, cuando este sea razonablemente esperado y previsible para un observador objetivo.⁴

Para encontrar tal causalidad, lógicamente, debe identificarse de manera suficiente las circunstancias de rodearon el suceso bajo análisis. Así pues, en el caso *sub judice* no está probada la relación de causalidad y no hay cabida para un fallo que acoja las pretensiones de la parte actora en la medida en que no se otorgó certeza de los elementos fácticos que rodearon el supuesto accidente de la señora Amalia.

Probar suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió un suceso del cual se reclama una responsabilidad es sumamente fundamental, como lo expuso el Consejo de Estado en la siguiente sentencia donde, incluso, el régimen era objetivo, pero se descartaron las pretensiones porque no se probó con suficiencia cómo ocurrió el accidente:

Así las cosas, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no se puede perder de vista que, si bien la conducción de energía eléctrica es considerada de antaño como una actividad peligrosa, razón por la que, como se vio, la responsabilidad de la entidad que presta ese servicio puede ser declarada responsable a título objetivo, le corresponde a la parte actora probar, como lo señalaron las apelantes, además del daño, el nexo de causalidad que debe existir entre la actividad riesgosa en cabeza del Estado y este último.

En tal efecto, como se dejó expuesto, aunque en el proceso se encuentra debidamente acreditado el daño, esto es, la muerte del señor Giovanni Escobar, no puede concluir la Sala, como se realizó en la sentencia objeto de los recursos de apelación, a modo de indicio, que la misma se hubiera producido como consecuencia de la concreción del riesgo creado por las Empresas Municipales de Cali-EMCALI E.I.C.E E.S.P-, en el ejercicio de la actividad de conducción de energía eléctrica.

Lo anterior, debido a que el simple hecho de que la demandada posea redes eléctricas subterráneas o aéreas en el sector donde fue encontrado sin vida el cuerpo del señor Escobar, no implica fácticamente que la electrocución que causó su muerte se haya presentado como consecuencia del contacto de la víctima con dicho cableado de alta

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de noviembre de 2019. Exp. 05001-23-31-000-2002-02333-01

tensión, si se tiene en cuenta que este estaba extendido en forma subterránea o a una altura de 10 metros sobre la vía, **por lo que, al no haberse demostrado las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos, no es posible asegurar la existencia del nexo causal entre el daño y la actividad que desarrollaba la demandada.**

(...)

Así, la Sala considera que con las pruebas que obran en el expediente no es posible imputar a las Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E E.S.P- la muerte del señor Giovanni Escobar, **pues, pese a que, como quedó acreditado, esta se debió a una arritmia cardíaca POR ELECTROCUCIÓN, la parte actora no logró demostrar que fuera ocasionada por haberse presentado un contacto de la víctima con cables de energía eléctrica de alta tensión,** razón por la cual se revocará la sentencia apelada, toda vez que, sobre la carga de la prueba, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa al señalar, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C⁵., que recae sobre quien alega el hecho del que pretende una indemnización a su favor, o que excepciona o controvierte, cumpliéndose así la regla de que quien afirma o niega, es quien debe demostrar.

No basta, entonces, para sustentar una pretensión, hacer uso de referencias, sino acompañar las afirmaciones con la certeza derivada de los hechos probados, pues son estos los que permiten resolver en uno u otro sentido el fondo del asunto. (mayúscula, negrilla y subrayas propias)

En el presente caso no existe siquiera certeza sobre el elemento con el cual acontece la supuesta caída. Por un lado, la demanda afirma que el daño se generó al resbalar con una rampa ubicada en el andén; así mismo, en el hecho segundo se refiere que la señora Amalia se encontraba bajando unos escalones (a consecuencia de lo cual en realidad pudo caer, y más teniendo en cuenta su edad) y, para rematar, se añade la existencia de un poste en el lugar de los hechos, sin explicar por qué su ubicación o instalación se puede considerar irregular, o cómo incidió en la ocurrencia del hecho dañino.


Se vislumbra, pues, que ni siquiera se da claridad con el escrito de demanda sobre cuál es el elemento que generaría la responsabilidad civil, más aún, no se establece ni siquiera porque alguno de estos elementos se encontraría bajo la custodia y cuidado del servicio de Acuavalle.

Ante esta incertidumbre causal que solo obedece al incumplimiento de la carga procesal de la contraparte, se suman las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues aparte de la

⁵ **Nota del texto:** Art. 177.- *Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.*

afirmación de la contraparte, no existe realmente ningún soporte que acredite tales circunstancias, pues la historia clínica no refleja en qué dirección recogieron a la señora Amalia y aunque la hora es aproximada, no por ello corre con igual suerte las circunstancias de modo y lugar.

Téngase en cuenta que, conforme a certificación del Municipio de Roldanillo, los andenes de la zona se encuentran acorde con las normas técnicas:

	MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA <small>Nit 891.900.289-6</small>	PÁGINA 1 DE 1
	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO:
		Versión
		Fecha:


100.2-07

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA:

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial "PBOT" adoptado mediante el Acuerdo No. 157 del año 2000, que sobre la zona peatonal ubicada en sobre la Carrera 6 entre Calle 9 y 10, en el costado sur del barrio *San Nicolas* el sector en referencia, cumple las especificaciones técnicas de zona peatonal (anden).

Se anexa registro fotográfico.



Ante este panorama tan difuso cabe preguntarse ¿Realmente el evento sucedió en la dirección plasmada? ¿Se materializó con la rampa, por la conducta de la demandante al

bajar los escalones, por la presencia del poste? ¿Y si la caída de la señora Amalia obedeció a un desequilibrio en su caminar o terminó enredándose con otros elementos que podían encontrarse en la calle? Todas estas cuestiones salen adelante ante la incertidumbre que permea esta *litis*.

3.2. Hecho exclusivo de la víctima y hecho exclusivo de un tercero

En el remoto caso de llegarse a considerar la debida acreditación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó el suceso que origina la demanda, solicito al despacho se declare la presente excepción *-hecho exclusivo y determinante de la víctima, y hecho de un tercero-* teniendo en cuenta que la causa eficiente del suceso que nos ocupa fue el actuar descuidado de la señora Amalia.

Como profundización de esta excepción, debe recordarse los lineamientos y alcances de las causas extrañas que ha expuesto el Consejo de Estado⁶:

En cuanto a la eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, alegada por algunas de las entidades demandadas a lo largo del trámite de la presente acción, conviene recordar que, al igual que acontece con la fuerza mayor, el caso fortuito y el hecho exclusivo y determinante de la víctima, se precisa de tres elementos para admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado. (Énfasis propio).

En adición, esta misma autoridad ha agregado⁷ un requisito a las causas extrañas y precisó los restantes de la siguiente forma:

(i) Que sea la causa exclusiva del daño. Si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de éstos frente al perjudicado (...).

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio (...).

(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad (...).

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 08 de mayo de 2019. Rad. 43.332. Consejero Ponente: María Adriana Marín.

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de noviembre de 2018. Rad. 41.514. Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas.

En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que ésta se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, que la valoración sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para conjurar los del daño. (Subrayado propio).

Aunque en el caso *sub-lite* estamos ante una magna incertidumbre causal, el hecho exclusivo y determinante de la víctima es evidente si partimos del hipotético evento de que los hechos de la demanda son ciertos. Sea que el accidente haya acaecido con una rampa o un poste, la *causa eficiente* del daño se circunscribe estrictamente a la conducta de la señora Amalia.

Pártase de la premisa de que el accidente acontece, según la demanda, la señora Amalia vive en la carrera 8 #10-80, esto es, a dos calles o cuadras de la carrera 6, lo que indica que la calle y sus condiciones eran más que conocidas para la víctima directa por ser habitante de esta misma. Así pues, existen altas probabilidades, por no decir total certeza, de que la demandante conocía de las supuestas irregularidades que se esgrimen en la demanda. Aún así, teniendo pleno conocimiento de ello, caminó de manera descuidada y sin plena atención a la calle, razón por la cual terminó materializando el riesgo que de por sí ya conocía.

En todo caso, aun sí la señora Amalia no hubiese tenido conocimiento de la supuesta irregularidad, esto poco o nada incide en la configuración del hecho exclusivo de la víctima, pues la presencia de una rampa y un poste son totalmente visibles para cualquier transeúnte, no solo por la magnitud de dichos elementos, sino que, por regla de la experiencia, cuando cualquier ser humano camina lo hace con plena atención y cuidado, máxime si sé es una persona mayor. En este orden de ideas, el hecho de que no los haya visualizado solo arroja la misma conclusión del párrafo antecedente: su actividad se ejecutó de manera descuidada y sin plena atención a la calle.

Además, la señora Amalia, al ser de la tercera edad, estaba en la obligación de estar acompañada por un mayor de 16 años para transitar por la vía pública, como lo exige el artículo 59 del Código Nacional de Tránsito. Ello, precisamente para evitar este tipo de caídas que pueden ocasionarse por el deterioro natural del cuerpo humano que llega con la vejes.

Ante este escenario, la **causa exclusiva** del daño es la acción ejecutada por Amalia, pues de no haberse ejecutado la caminata con suma desatención a su entorno o acompañada por una persona de 16 años o más, el daño desaparecería totalmente.

Así pues, se ven configurados los requisitos que implica la causa extraña que aquí se alega: **exterioridad** en cuanto Amalia no tiene relación alguna con los servicios que presta Acuavalle; **imprevisible** por cuanto Acuavalle no tenía conocimiento de la presencia de la rampa y el poste (negación indefinida) y, en todo caso, no era previsible para la asegurada que alguien se cayera en alguna de estas irregularidades cuando son totalmente visibles para cualquier transeúnte e; **irresistible** debido a que Acuavalle no tenía los medios para conjurar el daño, no solo porque no tenía conocimiento de la supuesta ausencia de tapa de alcantarilla o medidor de agua, sino porque se trata de circunstancias ajenas a su servicio.

Finalmente, no puede perderse de vista que, junto al hecho exclusivo de la víctima, se encuentra como causa eficiente del daño también el hecho de un tercero, que no es más que el propietario de la “*casa identificada con la nomenclatura 9-75*”, pues es conocido que la construcción de estas rampas obedece a la conducta de los propietarios de los inmuebles. Así mismo, la presencia e instalación del poste, de ser considerada irregular, también corresponde a una autoridad ajena a Acuavalle, por lo cual eventualmente deberá buscarse la responsabilidad en cabeza de estos.

3.3. Inexistencia de falla del servicio por parte de Acuavalle – Inexistencia de régimen de imputación – Ausencia de legitimación en la causa por pasiva de Acuavalle

Se propone la presente excepción atendiendo a que Acuavalle no ha incurrido en una falla del servicio – elemento axiológico para declarar la responsabilidad pretendida – toda vez que su actuación siempre ha estado conforme a derecho y todas las afirmaciones tendientes a demostrar una falla del servicio no se sustentan en ninguna obligación, ni precepto legal, sino más bien en lo que consideró la togada de la parte actora que debía hacer Acuavalle; aspecto que a toda luz se limita a una simple consideración.

Para que exista una falla del servicio es necesario que se acredite un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de una obligación en cabeza de la entidad prestadora de servicios. Además, conforme a lo manifestado por el Consejo de Estado, para que una falla de la administración pueda considerarse como causa del perjuicio pretendido, debe ser de tal magnitud que, teniendo en cuenta las circunstancias concretas en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente deficiente.

Sin embargo, en el presente caso no se divisa soporte probatorio capaz de demostrar la deficiencia en que incurrió Acuavalle, pues la parte actora se limita a manifestar la responsabilidad de la asegurada sin ni siquiera mencionar las obligaciones que se incumplieron de forma defectuosa o que no se cumplieron.

Las circunstancias de nuestro país nos otorgan una regla de la experiencia y es que las rampas en los andenes son construidas por los propietarios de los inmuebles, de modo que de encontrarse alguna irregularidad en este supuesto elemento, será aquel el llamado a responder, más no ninguna de las demandadas, menos Acuavalle.

Ahora bien, el Consejo de Estado ha determinado los eventos en los cuales una entidad estatal debe responder por huecos u obstáculos en la vía y, aunque tal precedente se refiere a dichas irregularidades viales, por simple lógica es extensible al caso sub judice. El precedente mentado ha adocinado lo siguiente:

De la misma manera, la Sala ha determinado la responsabilidad por omisión del deber de mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas y ii) cuando unos escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera durante un periodo razonable, sin que hubieren sido objeto de remoción o demolición para el restablecimiento de la circulación normal de la vía⁸.

El Consejo de Estado ha determinado, entonces, cuáles son los escenarios en los que se puede predicar una falla del servicio a cargo de una entidad estatal y, debido a que no se acreditó ninguno de tales eventos, incluso carece de certeza las circunstancias causales, no hay lugar a emitir una condena en contra de Acuavalle, quien carece de legitimación en el presente caso, habida cuenta de que la demanda ni siquiera explica el porqué de su vinculación.

3.4. Errada y excesiva valoración de los perjuicios e improcedencia del “daño estético”

Se solicita en la demanda el reconocimiento para la víctima directa los perjuicios inmateriales por daño moral, daño a la salud y lo que la apoderada demandante denomina “daño estético”, solicitando el pago de 100 SMMLV por cada perjuicio.

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 09 de junio de 2010, C.P.: Gladys Agudelo Ordóñez.

Sin embargo, tales solicitudes resultan desajustadas de acuerdo a los baremos establecidos por el Consejo de Estado. Sobre este punto, no debe perderse de vista que en el evento en que se logre endilgar una responsabilidad y/o un daño resarcible a cargo de la demandada, dicho daño sólo debe repararse en su justa medida y de conformidad con las pautas jurisprudenciales aplicables en nuestro país, sin perder de vista el carácter subjetivo que necesariamente implica la tasación de los perjuicios inmateriales.

Para esto, el operador judicial debe acudir a criterios jurisprudenciales que le permitan tasar, en justa medida, los perjuicios inmateriales y materiales. En palabras de la Corte Suprema de Justicia:

(D)entro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales' (artículo 16 de la Ley 446 de 1998; cas. civ. sentencias de 3 de septiembre de 1991, 5 de noviembre de 1998 y 1º de abril de 2003), es decir, se consagra el resarcimiento de todos los daños causados, sean patrimoniales, o extrapatrimoniales, aplicando la equidad que no equivale a arbitrariedad ni permite 'valoraciones manifiestamente exorbitantes o, al contrario inicuas y desproporcionadas en relación con los perjuicios sufridos (Flavio Peccenini, La liquidazione del danno morale, in Monateri, Bona, Oliva, Peccenini, Tullini, Il danno alla persona, Torino, 2000, Tomo I, 108 ss)⁹ (subrayado fuera del texto original).

No debe pasarse por alto, primero que nada, que actualmente el Consejo de Estado no reconoce ningún perjuicio inmaterial denominado “*daño estético*”, razón por la cual no puede reconocerse el mismo, más aún cuando lo solicitado por su concepto corresponde al mismo daño a la salud.

Ahora, si bien no hay lugar al reconocimiento de daño moral, ni el daño a la salud, pues los mismos no son atribuibles a las demandadas, en el eventual pero poco probable caso en el que en el presente proceso sea proferida una sentencia condenatoria, el señor juez no debe acceder a las pretensiones de la demandante, ya que estas debieron haber estado acordes con la naturaleza de los intereses quebrantados, lo que en este caso no sucede, toda vez que están claramente sobrestimadas. Sin pretender con esto avaluar un daño que por su naturaleza es inestimable.

⁹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado ponente: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO. SC16690-2016. Radicación 11001-31-03-008-2000-00196-01. Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), que a su vez cita a FLAVIO PECCENINI, La liquidazione del danno **morale**, in Monateri, Bona, Oliva, Peccenini, Tullini, Il danno alla persona, Torino, 2000, Tomo I, 108 ss.

No en pocas sentencias el Consejo de Estado se ha referido sobre la forma de tasar el monto del daño moral, y sobre lo que implica la reparación de este perjuicio, sobre lo cual estima lo siguiente:

(L)as características mismas que ofrece el hecho generador de responsabilidad, partiendo de la premisa de que reparar valores morales por la vía del "arbitrium iudicis" no busca crear ganancias para, nadie, sino corregir con -sentido de justicia, satisfacer o desagraviar sentimientos heridos sin derecho"¹⁰(destacado fuera del texto original).

Lo que quiere decir que la indemnización por perjuicio moral solo debe ser motivo de reparación y no de enriquecimiento, por lo que solo debe otorgarse en la medida que repare el daño. La mencionada autoridad, como se sabe, ha desarrollado unos baremos para el daño moral y el daño a la salud, otorgando montos específicos conforme a la gravedad de la lesión, especialmente atendiendo a una tasación de PCL.

Si bien en el presente caso no se evidencia una PCL que indique la gravedad de la lesión, lo cierto es que la historia clínica aportada, así como los documentos de fisioterapia, revelan que la demandante tuvo una correcta evolución posterior a la atención, pues su lesión solo consistió en la fractura en la diáfisis del humero, de modo que la gravedad de la lesión no superaría un 10%.

Siendo así, y atendiendo a los baremos del Consejo de Estado, una eventual indemnización del daño moral y el daño a la salud no debería superar los 10 SMMLV por cada concepto.

3.5. Insuficiente prueba del daño emergente – Carencia de valor probatorio de las facturas y documentos aportados

La parte demandante pretende probar el daño emergente con fundamento en una serie de facturas y documentos, los cuales no gozan de valor probatorio, porque o bien:

- i. No cumplen con los requisitos propios de la factura;
- ii. No dan cuenta de que hayan sido efectivamente destinadas para el tratamiento de la lesionado;
- iii. No tienen comprobante de pago, o

¹⁰ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2013, radicación 27894, magistrado ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera.

iv. Son ilegibles en todo o en parte.

Estas circunstancias impiden que sean tenidas en cuenta como medios idóneos y conducentes para probar el daño emergente. El artículo 774 del Código de Comercio determina:

Artículo 774. Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.
2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.
3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.

La norma en referencia niega el carácter probatorio a la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos previamente señalados, aunque, aclara que la omisión de cualquiera de ellos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.

Siendo así, las pretensiones encaminadas al reconocimiento sumas dinerarias como daño emergente resultan improcedentes toda vez que no se ajusta a los estándares probatorios fijados por el Consejo de Estado en la Sentencia de 18 de junio de 2019¹¹, conforme a los cuales para este tipo de eventos resulta necesario aportar la factura expedida por el profesional al que se haya acudido para poder acreditar la causación de los gastos.

Así mismo, no debe perderse de vista que existen, dentro de los rubros solicitados en el daño emergente, algunos que ni siquiera tienen prueba alguna, tales como los gastos de desplazamiento y medicamentos.

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44.572, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Ahora, aun cuando se pudiera considerar que alguna o algunas de las facturas aportadas cumplen con los requisitos, lo cierto es que en todo caso no dan cuenta de que hayan sido efectivamente destinadas para el tratamiento del lesionado, junto al hecho de que la mayoría de ellas son ilegibles.

Tampoco pueden perderse de vista que las facturas aportadas no se acercan al valor solicitado en la demanda por daño emergente, pues la suma total de aquellas, o por lo menos, las que son medianamente legibles, arroja un valor inferior.

En el Art. 1614 del Código Civil, está comprendida la definición del daño emergente, la cual se suscita cuando se presenta una disminución patrimonial de la víctima, que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento.

Para que pueda ser objeto de reparación económica, se requiere que sean ciertos y plenamente demostrados. Al tiempo que, el valor de la indemnización no puede extenderse más allá del detrimento patrimonial padecido por la víctima. Esto implica que al demandante le recae la obligación de probar la erogación mediante documento válido.

Tampoco puede perderse de vista que el daño emergente, al representar la pérdida de “*algún bien económico*”, es decir, una salida económica del patrimonio, debe encontrarse plenamente probada mediante medios idóneos y conducentes (no con simples afirmaciones, tales como las que constan en la mayoría de los documentos aportados a tal efecto). Véase que el Consejo de Estado ha sido exegético en lo que se refiere a la prueba de este perjuicio:

14.3.- La demandante reprochó en el recurso que el tribunal omitiera decretar los testimonios de J.M.G., B.A.M. y O.R. y la declaración de parte de la demandante. Dicha parte debió controvertir en primera instancia la decisión mediante la cual el tribunal omitió pronunciarse sobre el decreto de los testimonios y solicitar su práctica.

[...]

15.- La demandante reclama como **daño emergente** (i) los costos de reparación del vehículo, (ii) gastos de transporte que tuvo que asumir para llevar a sus hijos al colegio y para hacer el mercado los domingos, (iii) honorarios de abogado en el proceso penal y (iv) los impuestos sobre el automotor. Sin embargo, **no allegó medios prueba para acreditar los valores que pudieren desprenderse de estas afirmaciones.**

15.1.- Frente a los costos de reparación, en el expediente **no hay prueba de la condición en que el vehículo fue entregado a la demandante, ni de la cuantía de los gastos que**

asumió o habría tenido que asumir para dejarlo en las condiciones en las que se encontraba cuando fue inmovilizado. La accionante aportó el acta de entrega del vehículo con una serie de anotaciones ilegibles que no dan certeza de que el vehículo hubiese sufrido el grado de deterioro afirmado en la demanda. Además, el juez declaró el desesimiento de la prueba pericial decretada para determinar los costos de reparación mediante auto de 14 de abril de 2011 porque la accionante no sufragó los gastos del peritaje.¹²

Nótese, del anterior extracto de la sentencia, que para la prueba del daño emergente el Alto Tribunal exige:

- i. Prueba que acredite los valores afirmados
- ii. Prueba de la condición en la que se encontraba el bien afectado con anterioridad y posterioridad al daño
- iii. Prueba de la cuantía de los gastos que asumió o habría tenido que asumir para dejarlo en las condiciones en las que se encontraba

No obstante, lo cierto es que en el presente proceso los documentos aportados para acreditar el daño emergente, no son más que afirmaciones de los demandantes sin ningún sustento, pues no se ha acreditado, a modo de ejemplo, cómo se encontraban los bienes afectados antes y después del daño, ni prueba del valor económico de cada bien o producto afectado.

Tampoco puede ignorar el despacho que el daño emergente es un perjuicio que no es susceptible de presunción alguna, tal como lo ha afirmado el Consejo de Estado:

Sobre lo primero, no pasó de ser una simple afirmación de la demanda, que Y.Y.J. debió asumir patrimonialmente los gastos de desplazamiento a la ciudad de G. (cuantificados en \$2'000.000), con el propósito de aclarar su situación jurídica frente a la imposición de una condena por un delito que no había cometido. Del mismo modo, la actora no demostró a través de pruebas idóneas que, como se afirmó, asimismo, en la demanda, hubiera tenido que asumir el pago de honorarios por la presentación de la acción de tutela decidida en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia. **El incumplimiento de la carga de la prueba del daño emergente, cuya existencia y extensión no se presumen y no se acreditaron de manera concluyente directa o indirectamente a través de los elementos**

¹² Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 08 de septiembre de 2021, Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00387-01(44652), Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz.

de juicio recaudados, imponía denegar la pretensión de pago con respaldo en el artículo 177 del C.P.C.¹³

Finalmente, debe resaltarse que, conforme a la jurisprudencia de máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa, la simple afirmación de la parte demandante no basta para probar la existencia y cuantía del daño emergente. Además, un medio idóneo para probarlo, es mediante facturas que cumplan con todos los requisitos de estos documentos:

Por último, no resulta procedente el reconocimiento de los honorarios de abogado que la actora reclamó a título de daño emergente porque en el plenario no reposa ninguna prueba de su causación. En efecto, más allá de la afirmación de la demandante de haber sufrido ese perjuicio, en el expediente no obra ni una sola prueba que dé cuenta de que la sociedad actora asumió una obligación pecuniaria por ese concepto, ni tampoco documento alguno que dé cuenta de que hubiere hecho efectivamente alguna erogación en razón de ello o que esté obligada a hacerla en un futuro, menos aún, factura o documento equivalente que lo soporte, los cuales, de conformidad con lo previsto en el artículo 615 del Estatuto Tributario y la posición unificada por la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia del 18 de julio de 2019 (Exp. 44.572), constituyen la prueba idónea de una erogación por ese concepto.¹⁴ Por todo lo anterior, en el presente caso no se acreditó el daño emergente que supuestamente sufrieron los demandantes, puesto que no se acreditó la propiedad de los mismos frente a los bienes afectados, el estado en que se encontraban los bienes afectados antes y después de la inundación, ni prueba del valor económico de cada bien o producto afectado, o del valor que si debería sufragar por su reparación.

En ese sentido, no es posible tener certeza sobre la cuantía de dicho daño emergente, pues la demandante no ha cumplido con la carga probatoria que le corresponde. La sola afirmación del perjuicio, sin el soporte documental válido, es insuficiente. En conclusión, al no existir prueba documental válida que acredite el pago de los gastos de su motocicleta, no es posible determinar el monto del daño emergente reclamado por la demandante, por lo que dicha pretensión indemnizatoria no puede prosperar

¹³ Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 10 de febrero de 2021, Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00197-01(48380), Consejero ponente: Alberto Montaña Plata.

¹⁴ Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de septiembre de 2021, Radicación número: 76001-23-33-000-2012-00667-01(52894), Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez.

3.6. Concausalidad o concurrencia de causas en la producción del daño (subsidiaria)

Subsidiaria y únicamente en caso de que las anteriores excepciones no prosperen, propongo la presente, en el poco probable caso de que llegue a probarse que la participación de la víctima tuvo concurrencia en la producción del daño. En efecto, aun cuando se encuentre probado que la demandada incurrió en algún actuar que pueda reputarse como causa del hecho dañoso, no podrá olvidarse que la víctima le asistía un deber de cuidado propio y prevención del riesgo cosa que como se ha visto reiteradamente a lo largo de esta contestación no cumplió.

Sobre el principio de concausalidad la jurisprudencia nacional ha dicho:

Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.¹⁵

En este sentido, se propone que en tal caso la condena sea disminuida en un 50% o según considere el juez la concurrencia y participación de cada causa en la producción del hecho.

3.7. Excepción genérica

Me refiero con ello a cualquier hecho o derecho a favor de mi mandante, que resultare probado dentro del proceso, toda vez que el juez oficiosamente debe declarar probadas las excepciones que resulten de los hechos acreditados en el expediente de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso. Por lo anterior, le solicito a su despacho declarar probada cualquier otra excepción que resulte acreditada a lo largo del proceso frente a la demanda.

¹⁵ Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002 exp. 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros.

Véase también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005); Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784); Actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

III. CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO.- Es cierto que la señora Amalia Rojas demandó a Acuavalle y otros dentro del proceso de la referencia por el accidente que sufrió el 29 de febrero de 2020.

AL HECHO SEGUNDO.- En este numeral se consignan dos afirmaciones, frente a las cuales me pronuncio de la siguiente forma:

Es cierto que Acuavalle tomó con SBS Seguros y otras coaseguradoras la Póliza de seguro de responsabilidad civil No. 8001083928, a la cual se encuentra vinculada el certificado de Póliza de SBS No. 1000168, el cual se aporta (en adelante, la “Póliza”).

Es cierto que Póliza ha tenido vigencia desde el 27 de junio de 2019 hasta el 06 de junio de 2020, habida cuenta de diferentes renovaciones. Sin embargo, por cuanto el daño del presente caso se presentó el 29 de febrero de 2020, solo es aplicable el anexo con vigencia temporal comprendida entre el 16 de febrero de 2020 al 01 de mayo de 2020.

AL HECHO TERCERO.- Es cierto que ante la relación contractual aseguraticia, SBS Seguros tiene legitimación en la causa para comparecer dentro del presente proceso. Lo anterior, no obstante, no significa que mi representada deba responder, puesto que, como se expone, prescribió la acción ordinaria del contrato de seguro con la que contaba Acuavalle.

2. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones, en la medida en que operó la prescripción de la acción ordinaria del contrato de seguro con la que contaba Acuavalle.

Igualmente, en el evento de una remota condena, la responsabilidad de mi mandante se limitará a reembolsar el dinero que la asegurada deba pagar y no podrá ser condenada directa ni solidariamente a pagar a la parte demandante, pues ésta no ejerció la acción directa que pudo tener en contra de mi mandante. En este sentido, se proponen las siguientes:

3. EXCEPCIONES DE MÉRITO

3.1. Prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguros

El Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros. En efecto, en su artículo 1081 establece previsiones no solo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Al respecto señala la mencionada disposición:

La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado (es decir, el asegurado) haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas (terceros ajenos al contrato de seguros) y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes (destacado y paréntesis fuera del texto original).

Al analizarse la norma anterior, es necesario tener presente que “*por interesado*” y “*toda clase de personas*”, expresiones usadas en los incisos segundo y tercero, debe entenderse a quien deriva algún derecho del contrato de seguro –que al tenor de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 1047 del Código de Comercio son el tomador, el asegurado y el beneficiario.

Teniendo en cuenta que la tomadora y asegurada de la póliza vigente y aplicable fue quien dio origen al llamamiento en garantía realizado a mi mandante, el tipo de prescripción que opera para esta sociedad es la ordinaria, de dos (2) años, la cual empezará a correr a partir del momento en que la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial. Al respecto señala el 1131 del Código de Comercio:

En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial (destacado fuera del texto original).

Por lo anterior, resulta claro que la prescripción ordinaria para el asegurado empieza a correr desde el día en que la víctima le presentó la petición judicial o extrajudicial. En este caso, la prescripción empezó a correr desde el día 27 de abril de 2022, fecha en la cual, tal

y como consta en el expediente, se llevó a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial entre los demandantes y la entidad asegurada:

3. El día de la audiencia celebrada de forma no presencial el 27 de abril del 2022, ACUAVALLE S.A. ESP, CELSIA COLOMBIA S.A. ESP y la parte convocante.
4. No se hizo presente el apoderado de la parte convocada MUNICIPIO DE ROLDANILLO, y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. , luego de transcurrido un periodo de días prudencial, para que se recibiera por

Esto significa que, a partir de esta fecha, el llamante contaba con dos años para demandar o llamar en garantía a mi poderdante, si pretendía interrumpir la prescripción. En otras palabras, el llamamiento en garantía debía ser presentado a más tardar, en principio, el 28 de abril de 2024, no obstante, como dicha fecha era domingo, se extendió hasta el **lunes 29 de abril de 2024**.

Sin embargo, tal y como consta en el expediente, dicho llamamiento solo fue presentado por la asegurada el día 30 de abril de 2024, cuando ya las acciones derivadas del contrato de seguro se encontraban prescritas hace más de un año:

2/5/24, 16:36

Correo: Juzgado 05 Administrativo Oral - Valle del Cauca - Cartago - Outlook

RAD. 2022-00385 - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - ACUAVALLE SA ESP

Gestión Jurídica Efectiva <acuavalledefensa@gmail.com>

Mar 30/04/2024 15:40

Para:Juzgado 05 Administrativo Oral - Valle del Cauca - Cartago <j05admcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:Diana Vanessa BENJUMEA FLOREZ <notificacionesjudiciales@axacolpatria.co>;Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>;notificaciones.judiciales@hdi.com.co <notificaciones.judiciales@hdi.com.co>; notificacionesjudiciales@allianz.co <notificacionesjudiciales@allianz.co>;olsuafra28@hotmail.com <olsuafra28@hotmail.com>; olgasuarezfranco1964@gmail.com <olgasuarezfranco1964@gmail.com>;notificacionjudicial <notificacionjudicial@roldanillo-valle.gov.co>;atencionalcliente@serviciospublicosroldanillo.com <atencionalcliente@serviciospublicosroldanillo.com>;Jeison Andres Gomez Yara - Man Power De Colombia Ltda <Notificacionesjudicialescelsia@celsia.com>

 7 archivos adjuntos (10 MB)

Poliza No. 8001083928 .pdf; Llamamiento en garantía - 2022-00385 - Amalia Rojas Franco.pdf; C.E.R.L. - HDI SEGUROS SApdf.pdf; C.E.R.L. - AXA COLPATRIA SEGUROS SA.pdf; C.E.R.L. - ACUAVALLE SA ESP.pdf; C.E.R.L. - SBS SEGUROS COLOMBIA SA.pdf; C.E.R.L. - ALLIANZ SEGUROS SA.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de acuavalledefensa@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Cali, 30 de abril de 2024

Por lo anterior y con base en las consideraciones expuestas, solicito se declare probada la anterior excepción.

3.2. Límite de la suma asegurada, disponibilidad del valor asegurado y condiciones del contrato de seguro

De no prosperar o solo hacerlo parcialmente las excepciones propuestas en el acápite de la contestación a la demanda o las que configuren hechos que eximan de responsabilidad a la asegurada y que sean debidamente acreditados durante el proceso, solicito que en la eventual condena en contra de mi representada se tenga como límite de la misma la suma asegurada en las condiciones de la póliza, esto es, teniendo en cuenta los límites, amparos, sumas aseguradas, deducibles, exclusiones, etc., de tal manera que se respeten los términos del contrato de seguro.

En el evento de que los hechos que dieron origen a este proceso impliquen una de las exclusiones pactadas en el contrato de seguro, la compañía aseguradora estará relevada de asumir obligación alguna.

Ahora, la suma o valor asegurado es la cantidad fijada en cada una de las garantías de la póliza que constituye el límite máximo de la indemnización a pagar, en atención a los diferentes conceptos, por parte del asegurador en caso de siniestro. Es decir, la póliza tendrá cobertura de uno o diversos siniestros que puedan presentarse durante la vigencia de la póliza, sin que en ningún caso se pueda superar la indemnización total la suma o valor asegurado.

En tal virtud, en caso de proferirse una condena que implique una obligación a cargo de la aseguradora deberá tenerse en cuenta el monto disponible en ese momento exacto (de condena) y que, por supuesto, dependerá de la suma total de los pagos efectuados por SBS Seguros S.A. que puedan haberse realizado con ocasión de otros siniestros presentados durante la misma vigencia. Pagos que podrán haberse presentado (o presentarse) derivados del mismo siniestro o de siniestros que nada tienen que ver con el que nos ocupa en este proceso, pero que en todo caso implican la afectación de la misma póliza.

En consecuencia, deberán tenerse en cuenta tales pagos al momento de dictarse sentencia, providencia que necesariamente deberá hacer referencia al valor asegurado disponible para el momento en que se profiera el fallo en caso de que el mismo sea condenatorio. De tal suerte que si por los pagos que se hayan realizado con ocasión de otros siniestros el valor asegurado se ha agotado, así deberá declararse en la sentencia y en tal caso la compañía que represento estará relevada de asumir pago alguno en este proceso.

Lo anterior, por supuesto, no constituye, bajo ninguna circunstancia, aceptación de responsabilidad alguna. Reitero que mi representada se opone a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la medida que desconozcan las condiciones particulares y generales del contrato de seguro.

3.3. Límite de responsabilidad de SBS Seguros S. A. por coaseguro pactado en la póliza

En el caso que nos ocupa, existe un coaseguro pactado que implica que la responsabilidad en que incurra la asegurada Acuavalle está cubierta simultáneamente por SBS Seguros en un Diez por ciento (10%) y por otras aseguradoras en el setenta por ciento (90%) restante. En la caratula de la Póliza No. 8001083928, que da cuenta del contrato de seguro que se hace valer en este asunto, expresamente se precisa la participación de cada una de las compañías aseguradoras.

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO			
CÓDIGO	COMPAÑÍA	% PARTICIPACION	PRIMA
2	ALLIANZS SEGUROS SA	30	7,641,986.26
18	HDI SEGUROS S A	20	5,094,657.51
1	SBS SEGUROS COLOMBIA S A	10	2,547,328.75

Igualmente consta en el certificado anexo:

COASEGURO ACEPTADO	
COMPAÑÍA	% PARTICIPACION
LIDER: SEGUROS COLPATRIA S.A	DE SBS SEGUROS: 10.0

(Destacado propio).

El artículo 1095 del Código de Comercio que se encuentra a continuación de las normas que regulan la coexistencia de seguros se refiere a este tipo de eventos y estipula que *“las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro”*.

Así las cosas, el límite de responsabilidad de SBS Seguros S.A. es proporcional al riesgo asumido, esto es, hasta el diez por ciento (10%) del valor del siniestro. Lo anterior sin perjuicio de condiciones adicionales como pudiere ser la aplicación de deducible.

3.4. Deducible pactado

Sin perjuicio de que esta excepción está cobijada en la formulada en el numeral anterior, por su especial regulación legal resulta pertinente exponer los hechos que la fundamentan de forma separada. En las condiciones particulares del contrato de seguro suscrito entre la asegurada y SBS Seguros S.A. se pactó expresamente un deducible, esto es, una suma o porcentaje que debe asumir la asegurada siempre que se presente un siniestro que tenga cobertura.

En consecuencia, si en la eventual sentencia condenatoria que se profiera en este asunto se determina que el evento que dio origen a esta demanda es de aquellos incluidos en el amparo contratado y no opera ninguna exclusión, SBS Seguros S.A. solo estará obligada a asumir el pago del siniestro por encima del valor del deducible, que siempre estará a cargo de la asegurada. En otras palabras, en aplicación de lo acordado por las partes al suscribir el contrato de seguro, la asegurada asume las pérdidas que no excedan el valor del deducible; y solamente si el siniestro implica una pérdida superior a dicho monto habrá cubrimiento del seguro.

El deducible pactado en la póliza que fundamenta el presente llamamiento en garantía tiene un valor del diez por ciento (10%) de la pérdida, mínimo 1 SMMLV, como se ve enseguida:

DETALLE DE COBERTURAS			
ASEGURADO : SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA NIT 890.399.032-8.			
Dirección del Riesgo 1 : AV 5N 23AN 41/45/49 VERSALLES, CALI, CALI, VALLE DEL CAUCA.			
Ramo : RESPONSABILIDAD CIVIL			
SubRamo : R.C.E. GENERAL			
Objeto del Seguro : R.C.E. - PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL ASEGURADO			
AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	LIMITE POR EVENTO	
R.C.E. GENERAL (PREDIOS , LABORES Y OPERACIONES)	7,000,000,000.00	0.00	
Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO		MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	7,000,000,000.00	0.00	
Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO		MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2,100,000,000.00	1,050,000,000.00	
Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO		MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	
RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS	7,000,000,000.00	3,500,000,000.00	
Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO		MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	3,500,000,000.00	700,000,000.00	
Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO		MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	
R.C.E. VIAJES AL EXTERIOR	7,000,000,000.00	0.00	
Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO		MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	
R.C.E. CONTAMINACION	7,000,000,000.00	0.00	
Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO		MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	
GASTOS MEDICOS	700,000,000.00	350,000,000.00	
R.C.E. PARQUEADEROS	2,100,000,000.00	1,050,000,000.00	
Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO		MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	

(Destacado propio).

Igualmente consta en el certificado aportado:

DEDUCIBLES
<p>DESCRIPCION</p> <p>COBERTURA: RC - AMPARO DE PREDIOS-LABORES-OPERACIONES, RC - AMPARO OPCIONAL DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES, RC - AMPARO OPCIONAL DE VEHICULOS NO PROPIOS, RC - AMPARO OPCIONAL DE VEHICULOS PROPIOS, RC - AMPARO OPCIONAL DE GARAJES Y PARQUEADEROS, RC - AMPARO OPCIONAL DE PRODUCTOS, RC - AMPARO OPCIONAL DE BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL, RC - AMPARO OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, RC - AMPARO OPCIONAL DE USO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, RC - EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO DENTRO DE SUS PREDIOS, RC - AMPARO OPCIONAL DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS, RC - AMPARO OPCIONAL DE ERRORES DE PUNTERIA DE CELADORES Y/O VIGILANTES, RC - AMPARO OPCIONAL DE AVISOS Y VALLAS DENTRO Y FUERA DE LOS PREDIOS</p> <p>DEDUCIBLE : 10.00 % DE LA PERDIDA, MINIMO : 1.00 SMMLV</p>

(Destacado propio).

3.5. Excepción genérica

Me refiero con ello a cualquier hecho o derecho a favor de mi mandante, que resultare probado dentro del proceso, toda vez que el juez oficiosamente debe declarar probadas las excepciones que resulten de los hechos acreditados en el expediente de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso. Por lo anterior, le solicito a su despacho declarar probada cualquier otra excepción que resulte acreditada a lo largo del proceso tanto frente a la demanda como al llamamiento en garantía.

IV. COMUNES A LA DEMANDA Y EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. PRUEBAS

1.1. Documentales

1.1.1. Póliza No. 8001083928, con vigencia comprendida entre el 16 de febrero de 2020 y el 01 de mayo de 2020, la cual ya fue aportada al proceso.

1.1.2. Certificado – Póliza No. 1000168 de SBS Seguros, con vigencia comprendida entre el 16 de febrero de 2020 y el 01 de mayo de 2020.

1.2. Interrogatorio de parte

1.2.1. Solicito al Despacho que en la oportunidad procesal oportuna se me permita interrogar a la demandante Amalia Rojas.

2. ANEXOS

2.1. Poder para actuar.

2.2. Certificado de existencia y representación legal de SBS Seguros.

2.3. Certificado de existencia y representación legal de Hurtado Gandini Dávalos

Abogados S.A.S.

3. NOTIFICACIONES

3.1. Mi poderdante, la compañía SBS Seguros Colombia S.A., las recibirá en la Avenida 9N # 101-67, Piso 7 de Bogotá D.C., y en el correo electrónico: notificaciones.sbsegueros@sbsegueros.co.

3.2. Los demandantes, los demandados y el llamante en garantía en las direcciones por ellos aportadas.

3.3. El suscrito las recibirá en la Calle 22 Norte # 6AN-24, Oficinas 901 y 902, Ed. Santa Mónica Central, del Distrito Especial de Santiago de Cali y en los correos electrónicos: notificaciones@hgdsas.com ; oarango@hgdsas.com ; cdperez@hgdsas.com y jdrobles@hgdsas.com.

Atentamente,



FRANCISCO J. HURTADO LANGER

T.P. 86.320 del C.S. de la J.

Representante legal y abogado designado de

HURTADO GANDINI DAVALOS ABOGADOS S.A.S.

NIT 805.018.502-5